



Mensaje, 2 de octubre de 2018

MENSAJE DE LA LICENCIADA RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA EN OCASIÓN DE SU SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN COMO TITULAR DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS - PDDH

Saludo.

Sean bienvenidos y bienvenidas, esta ocasión me satisface compartirles los resultados de mi segundo año de mandato, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, cargo con el cual adquirí un compromiso no solo profesional, sino personal, con la tutela de la dignidad humana en El Salvador, que es lo que guía las prioridades e ideales de mi gestión, en acuerdo con los principios constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Desde aquel momento fui consciente de los retos de tal compromiso, y ello me ha llevado a orientar todos los esfuerzos para que desde las diferentes dependencias de la Procuraduría se brinde la respuesta más efectiva y oportuna a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que son nuestra prioridad, así como atender con mayor cercanía las demandas que nos realizan desde la sociedad civil, lo que nos ha permitido estar presentes en diferentes espacios y que pueda pronunciarme oportunamente en las temáticas que lo requieren.

A partir de mi mandato constitucional y junto a mi equipo de trabajo realizamos un decidido esfuerzo para contribuir al respeto y garantía de los derechos humanos, a través de procesos de protección; pero además, de educación, difusión y sensibilización destinados a las víctimas, a las mujeres, a poblaciones en condición de vulnerabilidad, a instituciones del Estado y a la población en general.

También, estoy consciente que una parte importante en la construcción democrática es la rendición de cuentas, aspecto que he retomado con la mayor seriedad, ya que constituye una práctica de interlocución necesaria con la población, la que debe estar al tanto del quehacer de las entidades estatales para poder ejercer un control de la adecuada administración de la cosa pública, siendo, además, un elemento vinculado estrechamente a los derechos al acceso a la información y a la participación ciudadanas en asuntos públicos. Este ejercicio democrático, permite que las personas puedan retroalimentar la actualización de las actividades que realizamos como parte del Estado y mejorar nuestra actuación en el campo de los DDHH.

En ese marco, como respuesta a las preocupaciones de la sociedad detectadas a partir del trabajo cercano a la realidad nacional, hace un año asumí cinco compromisos de atención especial durante mi trabajo al frente de la institución que servirían de base para desarrollar las atribuciones constitucionales que me han sido conferidas. Éstos se refieren a impulsar una cultura de paz, contribuir a erradicar la violencia, propiciar espacios para la coordinación interinstitucional, promover la defensa de la vida e impulsar nuevos acuerdos.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

A un año de haberlos asumido, y al término de mi segundo año de gestión, presento de manera breve la labor institucional que se ha realizado en cada uno de ellos, lo cual es el reflejo del trabajo arduo y comprometido de todo el personal que conforma la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tales como Procuraduría Adjunta, Procuradurías Adjuntas específicas, Delegaciones Departamentales, Departamentos Especializados, Escuela de Derechos Humanos, Secretaría General y, todas las dependencias que forman parte de las áreas de protección, promoción de derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Impulsar una Cultura de Paz

Al asumir este compromiso se tuvo claro que su objetivo implica que cada persona, cada funcionario o funcionaria, deben asumir la responsabilidad de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, lo cual conllevará a generar una cultura de paz en El Salvador.

Es por ello, que las acciones realizadas desde la promoción de los derechos humanos se conciben integralmente vinculadas al Sistema de Protección de los Derechos Humanos; ya que al generar y facilitar la divulgación de información y conocimientos sobre los derechos humanos se contribuye a crear una cultura de respeto y garantía que favorece la prevención de graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que permite a la ciudadanía conocer sus derechos y los mecanismos de reparación.

Asimismo, en el Plan Nacional de Promoción, he establecido como eje transversal la Cultura de Paz, lo que implica que en cada una de nuestras actividades de difusión y educación inculcamos los valores de ésta. Un especial aporte, ha sido la creación e institucionalización en diciembre del 2017, del Premio Nacional de Derechos Humanos Cultura de Paz, con el cual rendimos homenaje a quienes defienden y promueven los Derechos Humanos a través de un reconocimiento que destacó a mujeres, hombres, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que de forma heroica, ejemplar, incluso anónima e invisible realizaron acciones positivas a favor de los Derechos Humanos que aportan valores para la construcción de la paz.

Además, como parte del trabajo en este compromiso, a nivel nacional se han desarrollado talleres, jornadas educativas, verificaciones, actividades conmemorativas, foros, cursos, presentación de informes, entre otros.

También, desarrollamos las actividades del Plan de Verificación y Observación Electoral 2017-2018, con voluntariado de la población seleccionados y capacitados quienes apoyaron a PDDH el día de las elecciones al personal interno. En ese contexto, se verificó el voto residencial, el proceso de conformación de los Organismos Electorales Temporales y se elaboraron documentos para la intervención en crisis relacionados con el tema electoral. Actualmente ya se están realizando actividades relacionadas con el proceso de elecciones presidenciales 2019.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

La operativización del Plan permitió que se desplegaran 746 personas a nivel nacional, de las cuales 346 forman parte del personal permanente de la institución y 400 fueron personas voluntarias que colaboraron con el trabajo de la PDDH.

Contribuir a Erradicar la violencia

Al comprometerme a trabajar en este aspecto, hago referencia a todo tipo de violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como los crímenes de odio, violencia social de pandillas y crimen organizado.

En el trabajo de protección que realizan las diferentes instancias de la Procuraduría se prioriza la asistencia a los grupos en condiciones de vulnerabilidad y se hace conciencia ante las autoridades competentes sobre la protección y garantías de los derechos humanos.

Se ha logrado la inclusión de integrantes de las Unidades Juveniles en el Consejo Consultivo de NNA del CONNA, lo cual se traduce en mayor participación en las actividades de prevención de la violencia y en la articulación de actividades con la Red de Atención Compartida (RAC) de La Paz.

A nivel interno se ha capacitado al personal sobre las rutas de abordaje de casos de mujeres víctimas de violencia y de atención a niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia sexual, y se ha socializado el Protocolo de atención a casos internos sobre violencia y discriminación contra las mujeres al personal administrativo. De igual manera, realizamos el proceso de capacitación al personal institucional y fuimos acreditados como zona libre de estigma y discriminación.

Apoyar la coordinación interinstitucional

Este compromiso implica que hay que agotar los mecanismos de diálogo y consensos ante cualquier conflicto, potenciando el rol del Estado.

Tomando en cuenta lo anterior, se ha hecho un estudio y análisis para la creación de redes interinstitucionales de cooperación para la atención y respuesta oportunas, a través de medidas de resguardo y de seguridad, similares a la figura de acogimiento de emergencia para las víctimas de desplazamiento forzado interno. Este esfuerzo se ha llevado a cabo en las comisiones municipales de prevención de la violencia y en asambleas ciudadanas.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

Por otra parte, y resaltando el diálogo como solución alternativa de conflictos, la participación de esta Procuraduría ha sido clave al disminuir la intensidad de los mismos e incluso, en muchos casos, para alcanzar consensos y acuerdos entre las partes, superando la crisis o la problemática que los originó. Es así que, a través de la sede central, hemos intervenido en 393 observaciones preventivas y atención de crisis.

Defensa de la vida

Con este compromiso se asume la responsabilidad de defender la vida de la persona no nacida, hasta la biodiversidad, los derechos a la salud, al trabajo, de las personas migrantes, de las personas desaparecidas, de las personas desplazadas internas, entre otros.

Como parte del trabajo con personas migrantes relacionado con este compromiso, se ha continuado con la toma de muestras de sangre para el ingreso en el Banco de Datos Forenses para ayudar en la búsqueda de cuerpos o restos de migrantes no localizados desaparecidos en la ruta migratoria. Asimismo, ha habido activación y acompañamiento de víctimas ante FGR, PNC, MINSAL, DAV, OLVAS, MINED, entre otros, para brindar atención psicosocial, así como acciones de protección y realizar acciones jurídicas.

Por otra parte, se tramitan casos de tutela en la protección del derecho a la vida y la salud de las personas adultas mayores que visibilizan el abandono que sufren y la negligencia de las instituciones del Estado en la violación de sus derechos.

En cuanto a los derechos de las mujeres, se ha diseñado una ruta de atención para casos de feminicidio como mecanismo institucional para la tramitación de dichos expedientes.

Con relación al derecho a un medio ambiente sano, se han realizado acciones para impulsar la aprobación de la Ley de Aguas, tales como conferencias de prensa, pronunciamientos, audiencias en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, y se ha dado acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil en sus exigencias por una legislación adecuada en la materia.

Impulsar nuevos acuerdos

Con este compromiso se busca trabajar por una justicia transicional, por la justicia a las víctimas, las del pasado y las del presente, y contribuir a cerrar ciclos de duelo.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

Se participa en reuniones periódicas con monitores del programa de indemnización a víctimas del conflicto armado verificando que se implementen las acciones de reparación a víctimas en los 14 municipios de La Paz; asimismo, se realizan acciones de promoción y reivindicación de las víctimas, verificando el cumplimiento del derecho a la justicia y de la asistencia multidisciplinaria.

Esta Procuraduría también ha participado en actividades de protección y promoción realizadas por la sociedad organizada e instituciones del Estado en temas de memoria histórica y justicia social, con la finalidad de que las obligaciones estatales de garantía, reparación y no repetición de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado sean cumplidas.

Por otra parte, se han realizado diligencias por una eventual ejecución de un relleno sanitario en el cantón San Francisco Angulo en Tecoluca, San Vicente ya que, de concretarse dicha obra, haría inviable la investigación de casos de masacres sucedidas en dicho lugar. Desde la institución que presido, hemos emitido medidas cautelares que impidieron un inminente daño del derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación.

Además, del cumplimiento de los compromisos señalados, deseo en esta rendición de cuentas, detallarles el trabajo que hemos realizado ante la desprotección y violaciones a derechos humanos que sufren nuestros compatriotas en los países de tránsito y destino, ya que en el mes de diciembre del año 2017, dispuse, organicé y realicé una visita in situ a los Estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, para verificar la situación de las personas que huyen de El Salvador a causa de la inseguridad que provoca la delincuencia y pandillas. La iniciativa fue respaldada por la Oficina para El Salvador del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), a quienes agradezco profundamente.

La visita in situ a zonas críticas de la ruta de la migración internacional forzada era una deuda que la PDDH tenía con la población desplazada y migrante. Nunca antes un Procurador o Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos había recorrido las carreteras y poblados, ni visitado las estaciones migratorias y albergues en México para constatar las condiciones de estancia de nuestros compatriotas y las duras condiciones de las personas defensoras de derechos humanos en esta ruta y empezar a crear una red de contactos para la protección y asistencia de los mismos.

Ante el éxito de dicho monitoreo y debido a que la migración y el desplazamiento a causa de la violencia es una problemática que nos afecta a nivel regional, como secretaria técnica del Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos, y sobre la base del convenio entre este organismo regional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, impulsé como una acción estratégica la realización de un monitoreo a albergues, entrevistas con autoridades y estaciones migratorias, por Belice, el cruce de la frontera de Guatemala por el Estado de Petén y el cruce con México por la frontera el Corozal, hacia los Estados de Tabasco y Veracruz, con el objetivo de monitorear otra ruta alterna que las personas migrantes y desplazadas del triángulo norte utilizan como tránsito y destino. La cual fue realizada, con el auspicio y acompañamiento de ACNUR Panamá, y por una delegación conformada por miembros de las defensorías de Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, el Ombudsman de Belice y mi persona, del 22 al 30 de septiembre del presente año.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

Como resultado de este monitoreo, el Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México publicarán un informe de recomendaciones a los Estados en mejora de la protección de las personas en situación de necesidades de protección internacional. Por lo tanto, estas misiones pueden ser consideradas como históricas y con ella pretendo dar impulso a otras acciones que permitan visibilizar la situación de las personas con necesidades de protección en el extranjero.

También, quiero compartirles datos relevantes de mi gestión, es así que se han tramitado 8, 618 denuncias y orientaciones que representan un atención directa a la población a nivel nacional. Asimismo, hemos emitido 6,144 pronunciamientos entre los que destacan 4, 649 resoluciones finales, 823 oficios y 660 resoluciones iniciales. Cabe señalar que continua siendo la Policía Nacional Civil la autoridad más denunciada con 1, 064 señalamientos. Y persiste el derecho a la integridad como uno de los mayormente vulnerados. Otro logro alcanzado es que hemos finalizado 8,773 expedientes que representa el porcentaje de 32.25% del total de casos de la mora histórica que encontré cuando asumí la titularidad de la institución.

En materia de promoción de derechos humanos se han realizado 551 actividades educativas, beneficiando a 14,217 personas entre población en general y funcionariado público, y 699 jornadas de difusión que impactaron a un aproximado de 23,866 personas.

Hoy, he realizado mi rendición de cuentas sobre el trabajo desempeñado, pero a la vez, deseo expresar el compromiso que orientará mi mandato en este tercer año, el cual será Promover el respeto de los derechos humanos frente a los actos de corrupción.

Este desafío que surge de la realidad que muestra que la corrupción sistemática, sobre todo la llamada gran corrupción, es considerada excluyente, discriminatoria y violatoria de derechos humanos; especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales; ya que afecta la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de estos derechos e impiden el goce progresivo de los mismos, sobre todo los de la población en condición más vulnerable.¹

Es por ello que, considero que la corrupción, sobre todo aquella con la cual se desvían grandes montos de dinero público, resulta un flagelo grave en contra de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos y sociales, que requieren el financiamiento económico para lograr su progresividad; en ese sentido, el dinero sustraído desequilibra el presupuesto de la nación en detrimento de las personas, grupos o poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por lo que, el tema de la corrupción no es ajeno al mandato que se me ha conferido de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y el cumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos, entre otras atribuciones, ya sea investigando casos individuales o colectivos, o por medio de la promoción y difusión, generando conciencia en la población y una cultura de denuncia para combatirla y prevenirla.



www.pddh.gob.sv



Mensaje, 2 de octubre de 2018

En este tercer año de mi gestión, el trabajo sistemático en este campo, me plantea nuevos retos; que me permita ejercer la contraloría pública para que las personas que realizan actos de corrupción respondan ante la justicia y en especial que se realice una reparación integral de los daños causados a consecuencia de dichos actos. Esto, implicaría por una parte contar con un equipo especializado que aborde la problemática de manera especializada, para ello tengo proyectado contar con una procuraduría adjunta específica para los temas de transparencia y anticorrupción, por lo que venido realizado diferentes gestiones para que se incremente el presupuesto institucional, lo cual no ha sido posible hasta la fecha. No obstante ello, con los recursos disponibles he estado vigilante de la actuación de las instituciones competentes en la materia, a efecto de velar porque estas cumplan con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos.

Por otro parte, es un desafío, fomentar la participación ciudadana para que se denuncien este tipo de hechos, como Defensora del Pueblo, estoy consciente de la importancia de visibilizar la corrupción como un tema de derechos humanos, porque ataca los valores democráticos y limita a gran escala las oportunidades de tener un proyecto de vida digno de las personas, ello retrasan el desarrollo de la sociedad. Es decir, tienen como consecuencia que no se garanticen derechos como la educación, salud, la alimentación, la vivienda digna, etc. Es por ello, que me comprometo a realizar un trabajo incansable por generar la conciencia a la población para que perciban que toda acción de corrupción significa la negación de sus derechos fundamentales.

El camino, no será fácil, al ser un tema que tradicionalmente ha sido abordado desde el ámbito penal, ético y de contraloría pública; por lo que espero contar con la comprensión de nuestra labor institucional en cuanto al tema, asimismo espero contar con la colaboración de las instituciones supervisadas.

En ese sentido, hago un llamado para que se sumen a nuestro esfuerzo, sigamos promoviendo y creando cultura de paz a través de la lucha contra la corrupción, para alcanzar el ideal de sociedad democrática que lleve a una transformación política, social, ambiental y económica de forma sostenida y en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Cierro mi intervención renovando mi compromiso con el cumplimiento de mi mandato constitucional, de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, creyendo firmemente que la unión de nuestras capacidades y esfuerzos como funcionariado y ciudadanía, permitirán la construcción de un lugar de convivencia pacífica y en el que las potencialidades puedan desarrollarse individual y colectivamente para alcanzar el desarrollo humano de El Salvador, eso es Cultura de Paz.

Muchas gracias.

San Salvador, 02 de octubre de 2018.

¹ Nash Rojas, Claudio (Dir), et. al. "Corrupción y derechos humanos: una mirada desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Facultad de derecho y Centro de derechos humanos de la Universidad de Chile, mayo 2014, p. 63.

